



Representación Permanente del Uruguay
ante F.A.O.

Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial:
los desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía.

Intervención de la Delegación de Uruguay
a cargo del Secretario de la Presidencia
de la República, Dr. Miguel Toma

Sr. Presidente:

La inseguridad alimentaria es un problema que el mundo viene tratando de solucionar desde la fundación misma de la FAO y, al parecer, seguirá siendo un problema grave en las próximas décadas.

A pesar de la importante reducción del hambre que se proyecta para el final del siglo, muchos países en desarrollo seguirán padeciendo la pobreza y la inseguridad alimentaria, debido a las altas tasas de crecimiento de su población, su débil estructura socioeconómica, la degradación de sus recursos naturales, los perjuicios causados por el cambio climático, a lo que se suma ahora el elevado precio de los alimentos que, según las predicciones de los analistas, ha llegado para quedarse.

La seguridad alimentaria en el planeta se encuentra estrechamente ligada a la agricultura ya que ésta tiene por delante el desafío de proporcionar alimentos a cada vez más seres humanos -la mayoría de los países en desarrollo- a la vez que conservar el medio ambiente, amenazado gravemente por las actividades de origen humano que alimentan el cambio climático.

Este cambio climático que hoy enfrentamos, se prevé que aumentará los riesgos asociados a la producción y a la vulnerabilidad de la población rural, especialmente en las regiones que tienen escasez de recursos hídricos y de la tierra, así como por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos.

A fin de mitigar este fenómeno, es preciso que los países más industrializados, que son los que emiten más gases de efecto invernadero, reviertan este proceso. El Protocolo de Kyoto y el cumplimiento de sus metas limitativas parece ser un buen comienzo, que es necesario profundizar.

Uruguay no es un emisor de estos gases provenientes de producciones industriales. Como país agrícola y en conocimiento de que la agricultura contribuye en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero, está identificado con la aplicación de estrategias de mitigación para los sectores agrícola y forestal.

Es así que, en un proceso que ya lleva más de veinte años, ha desarrollado un importante programa de forestación que tiene hoy sembradas más de 700.000 hectáreas de bosques, superficie importante en relación a su territorio.

Simultáneamente está desarrollando un Programa de Medidas Generales para la Mitigación y la Adaptación al Cambio Climático.

Dentro de este programa se ha identificado que uno de los sectores más vulnerables al cambio climático en nuestro país es el de los recursos costeros, debido al potencial aumento en el nivel medio del mar, a lo que se suma la mayor frecuencia y severidad de las tormentas costeras.

Se ha desarrollado un proyecto de implementación de medidas piloto de adaptación para combatir los efectos erosionantes y salinizadores. Se ha obtenido para ello el apoyo del GEF y será éste el primer proyecto de adaptación de las áreas costeras que se implementará en la región.

Por otro lado, como medidas de mitigación, se están desarrollando varios proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, relativos a la sustitución parcial de combustibles fósiles por cáscara de arroz en el proceso de fabricación de cemento, a la captura del biogás proveniente del relleno sanitario de residuos sólidos de la ciudad de Montevideo y a la generación de energía eléctrica a partir de residuos de la industria maderera, los cuales que reducirán emisiones por más de 2,5 millones de toneladas de dióxido de carbono en los próximos 7 a 10 años.

Sr. Presidente,

Hablando de estrategias de mitigación, surge la referencia inevitable a la producción de bioenergía y biocombustibles, que lleva implícita la posibilidad de desarrollo para la población rural, a la que podría brindarle nuevos e interesantes ingresos.

Sin embargo, la producción de agrocombustibles puede ocasionar cambios en la demanda, en el comercio, en la asignación de insumos productivos (tierra, agua, capital, etc.) y, finalmente, ocasionar un aumento de los precios de los productos agrícolas, tanto energéticos como tradicionales, poniendo en riesgo el acceso a los alimentos para los sectores más pobres.

Consideramos que la implementación de políticas adecuadas por parte de cada país, teniendo en cuenta sus características geográficas, ecológicas y sociales, puede reducir los riesgos de adopción de cultivos bioenergéticos sobre la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Pero es una realidad que se necesita aún más investigación y asistencia técnica para aprovechar las oportunidades derivadas de la producción de bioenergía sin afectar la seguridad alimentaria.

Por ello, apoyamos la labor de la FAO en el estudio e investigación, tendientes a la elaboración de sugerencias para elaborar políticas nacionales sobre biocombustibles, así como una lista de buenas prácticas voluntarias que permitan acotar los riesgos para la seguridad alimentaria y el medio ambiente que estos cultivos conllevan.

Sr. Presidente,

Durante décadas el comercio internacional estuvo caracterizado por los bajos precios relativos de los alimentos. Esto determinó en gran medida las posiciones de los países productores de alimentos en los foros internacionales en el campo económico, político y aún social.

Recordamos teorías como la del deterioro de los términos de intercambio, que observaba como una característica permanente, que unos países produciríamos alimentos a precios cada vez más bajos y otros fabricarían productos industriales y tecnológicos cada vez más caros.

Hoy las cosas son distintas, como corolario de un proceso de alza del precio de los alimentos que ha tenido aceleración muy grande a partir del 2006, incrementándose notablemente en el corriente año y dando como resultado que, a la fecha, estos productos han alcanzado los guarismos más altos de los últimos 30 años en términos reales.

El impacto de este fenómeno se ha traducido, lamentablemente, en hambrunas, miseria, desnutrición y, en varios países, ha generado motines y disturbios sociales.

Los factores determinantes de esta tendencia son diversos. Entre los estructurales destacan el aumento en la demanda de alimentos en la región asiática; el uso de los mismos para consumo animal y para la producción de biocombustibles; el escaso empleo de tecnologías avanzadas de cultivo; las políticas proteccionistas de los países desarrollados y, cada vez con más fuerza, la incidencia negativa del cambio climático.

A ellos se suman factores coyunturales como un notable aumento de la inversión financiera en commodities; las fluctuaciones monetarias; el aumento del precio del petróleo, con la consiguiente suba de los costos de transporte e insumos básicos; las medidas de restricción a las exportaciones que han aplicado grandes países exportadores y la reducción en los niveles de las reservas.

La magnitud del impacto de esta situación sobre los países y sus repercusiones sobre la seguridad alimentaria no es la misma en todas las situaciones.

Uruguay es un neto exportador de alimentos, por lo cual la coyuntura actual le es comercialmente favorable. Pero, asimismo, la suba del precio internacional de los alimentos ha arrastrado consigo a los precios internos, con el consiguiente perjuicio para los sectores de menores recursos de su población.

A fin de mitigar esta situación, se han adoptado medidas tendientes a la reducción de los precios domésticos, tales como acuerdos con los productores y tratamientos impositivos diferenciales a los alimentos, complementadas con programas de apoyo a los sectores más desprotegidos.

Desde el punto de vista de la oferta, es de señalar que se ha experimentado un gran aumento de las áreas de cultivo, así como un incremento de la producción pecuaria, todo lo cual se refleja en un aumento significativo de las exportaciones.

En el plano internacional, como han expresado los países latinoamericanos y del Caribe en su reciente reunión del SELA, resulta fundamental garantizar la transferencia de tecnologías agrícolas apropiadas desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, a fin de que puedan aumentar su producción de alimentos, así como el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur en esta materia.

Asimismo, consideramos que una conclusión exitosa en materia agrícola de la Ronda de Doha tendrá efectos positivos en la seguridad alimentaria mundial. La disminución de aranceles, la eliminación de los subsidios a las exportaciones y la reducción significativa de medidas de ayuda interna que distorsionan la producción y el comercio por parte de países desarrollados, redundará en una reforma fundamental del mercado agrícola mundial. De esa manera, los países productores eficientes tendrían las garantías necesarias para realizar inversiones que aseguren una expansión considerable de su producción y oferta exportable.

Por último, compartimos los conceptos vertidos en la documentación proporcionada por la Secretaría para esta Cumbre en el sentido de que es necesario comenzar a aplicar medidas para garantizar la seguridad alimentaria mundial a largo plazo y que dos de las cuestiones principales que deben estudiarse son :

- cómo desarrollar una nueva generación de tecnologías para la intensificación agrícola que sea sostenible económica y socialmente y que sea resistente al cambio climático y
- cómo evitar que continúe disminuyendo la disponibilidad de agua dulce y recursos del suelo para la producción de alimentos en el futuro.

Gracias, Sr. Presidente.